

PAROS POR TODAS PARTES

Roberto Rodriguez Fernandez – rfernandez@unicauca.edu.co

Insistimos, como lo expresamos en esta columna el pasado miércoles 19 de mayo, tenemos que cambiar las miradas sobre los conflictos sociales y políticos en Colombia. Ya no se originan en una ideología de izquierda, ni obedecen a un liderazgo unificado, ni persiguen tumbar a este gobierno.

Ahora hay asambleas populares en los barrios, conformadas por jóvenes, indígenas, afrodescendientes y campesinos, a los que se suman muchos otros sectores y organizaciones, que se movilizan en cada localidad con unas demandas nacionales y con sus propias peticiones, resistiendo a las políticas estatales, enfrentando a policías y a civiles armados, y siendo testigos de cómo se producen vandalismos no planificados por quienes protestan.

Ya no se teme a ser calificado como “auxiliador de la guerrilla” (que no existe), y se repudia a los políticos de profesión. Como en Chile, cuando se habla de dirigentes, “mientras más lejanos estén de la política, más confiables”. Claro, las clases políticas seguirán utilizando a sus militantes más duros, pero cada vez con un mayor descontento.

Los jóvenes vienen movilizados desde 2019, con algunas intermitencias por la pandemia. Hoy protestan desde los barrios, con sus madres, con mucho arte y bailes, resistiendo al estado, defendiendo a los movilizados, chocando con la fuerza pública, y sorprendiéndose con muchos actos destructivos inevitables, de los que nadie los protege.

No hay un líder (persona o grupo), las exigencias barriales son concretas y más profundas de lo que plantea el llamado Comité Nacional de Paro, y –por supuesto- los grupos comunitarios no cederán ni desactivarán sus bloqueos hasta que no vean cambios profundos en las exclusiones y desesperos por las graves crisis económicas, o ante la rabia que les generan las ineficacias y abusos de los gobernantes, o por la falta de aplicación del Acuerdo de Paz, o los asesinatos y violencias contra las poblaciones civiles en campos y ciudades.

Los jóvenes de las asambleas controlan las movilizaciones que hacen, con el apoyo de las organizaciones sociales y comunitarias, y precisamente por ello son atacados por la policía, los civiles armados, y por funcionarios de un gobierno que –ante sus incapacidades- solo atina a militarizar más las vías y espacios públicos. No dialoga porque demostraría que perdió su gobernabilidad y su legitimidad.

Mientras tanto, solo funcionan unos esporádicos “corredores humanitarios”, acuerdos a los que han llegado algunos gobernadores,

alcaldes, representantes religiosos, universidades y ONGs, que han decidido actuar como “mediadores”, asumiendo un marcado anti-militarismo.

También la comunidad internacional se ha mostrado crítica con las erráticas decisiones del gobierno, pero se necesita que envíen sus comisiones de estudio y de investigación sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que la lleven a concluir en la conveniencia de establecer sanciones internacionales a este régimen político.

Los actores políticos tradicionales, partidos, dirigentes, parlamentarios, todos en campañas electorales, no han encontrado espacios para jugar un papel activo porque la gente no confía en ellos; es iluso esperar que decidan poner el bienestar de la población por encima de sus intereses particulares, que planteen la necesidad de un gobierno diferente, con políticas reconstructivas; que desarrollen reformas hacia un estado eficaz frente a los problemas; lógicamente que impulsen la participación ciudadana real; que demuestren perseguir un desarrollo económico incluyente; y que sepan algo de la interculturalidad y de la construcción cotidiana de la paz.